

PROCEDIMIENTO: Aplicación General.

MATERIA: Tutela.

DEMANDANTE: CLAUDIA ANDREA MENESES OLIVA.

DEMANDADA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANTOFAGASTA.

RIT: T-457-2020

RUC: 20- 4-0303176-4

_____ /

Antofagasta, a veintisiete de abril de dos mil veintidós.

VISTO:

PRIMERO: *Individualización de las partes.* Que ante este Juzgado de Letras del Trabajo, en estos autos RUC **20-4-0303176-4** y RIT **T-457-2020**, se dedujo demanda de tutela de Derechos Fundamentales con ocasión del despido por **CLAUDIA ANDREA MENESES OLIVA**, C. de Id. N° 12.833.186-7, ingeniero comercial, con domicilio para efectos del juicio en Av. Minera Escondida N° 2884, dpto. 301, Jardines del Sur, Antofagasta, representada en el litigio por el abogado **Javier Vega Martinovic**, correos electrónicos javiervega@assem.cl y notificaciones@assem.cl, en contra de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA**, persona jurídica de Derecho público, RUT. 69.020.300-6, representada por su alcalde Ignacio Javier Pozo Piña, C. de Id. N° 18.918.233-3 o por quien en virtud del art. 4° del Código del trabajo ejerza dicha función a la época de notificación de la demanda, ambos con domicilio en Av. Séptimo de Línea N° 3505,



Antofagasta, representados en juicio por el abogado Raúl Aran Cortés, mail raul.aranc@imantof.cl.

SEGUNDO: Síntesis de las alegaciones de las partes. Que la actora indicaba, en lo esencial, haber sido nombrada Administradora Municipal de la Ilustre. Municipalidad de Antofagasta, en calidad de titular, con fecha 27 de enero de 2020, por la Alcaldesa Karen Rojo Venegas, ejerciendo sus funciones sin reparos ni objeciones de ninguna clase por ente o persona alguna. El 17 de agosto de 2020, el Alcalde Suplente Ignacio Pozo Piña, sin hacer ningún tipo de valoración ni consideración de sus antecedentes, y sin haber sumario alguno, dispuso su remoción del cargo, acto que fue notificado el 31 de agosto de 2020.

Agregaba que su remuneración alcanzó, para efectos del art. 172 del Código laboral, la suma de \$4.539.285.-, atendido el promedio de las remuneraciones de los meses de mayo, junio y julio de 2020.

Expresaba que el acto de desvinculación sufrido atentaba contra sus Derechos Fundamentales, desarrollando dos grupos de afectaciones.

La primera, relacionada con la vulneración al derecho a la vida, integridad física y síquica, garantizado en el art. 19 N° 1 de la Ley Fundamental, por cuanto al momento de su exoneración estaba haciendo uso de licencia médica e, incluso, la denunciada anticipó por los medios de prensa la intención de removerla del cargo, afectando su salud e integridad síquica, desconociendo la



demandada los efectos jurídicos de una licencia médica en conformidad a la normativa vigente.

La segunda, relacionada con el hecho que su remoción se vio motivada exclusivamente en una discriminación por su pública y conocida militancia en un partido político diverso al del Alcalde, lo que motivó la presurosa e infundada decisión de removerla, haciendo un uso excesivo e inmotivado de una facultad excepcional, siendo el acto de desvinculación discriminatorio, contraviniendo lo dispuesto en el art. 2° del Código del trabajo y artículo 19 N°s 2 y 16 de la Constitución.

Por todo lo anterior, solicitaba que se declarara que la denunciada había vulnerado sus Derechos Fundamentales con ocasión del despido y, consecuentemente, fuera condenada a pagar: (i) La indemnización especial del art. 489 inc. 3° del Código laboral por su máximo de once remuneraciones, en una suma de \$49.932.135.- o la suma que estime el Tribunal y (ii) la suma de \$9.078.570.-, por conceptos de licencias médicas que recibió la demandada y no pagó a la representada. Todo, más reajustes, intereses y costas, conjuntamente con la remisión de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro.

Contestando la demanda, señaló la Iltre. Municipalidad de Antofagasta que negaba los hechos denunciados en el libelo y, además, que el estatuto laboral no era aplicable en el caso, debiendo ser



desestimada la acción de tutela laboral y las pretensiones de la actora.

Seguidamente, reseñaba la compleja situación que había vivido el municipio durante el año 2020, en particular luego de la suspensión de la Alcaldesa Karen Rojo Venegas, por lo cual la demandante debería haber asumido las funciones de tal, pero al encontrarse con licencia médica desde el 27 de junio de 2020, la cual fue ampliada por otros treinta días a partir del 27 de julio del mismo año, impidió que subrogara en dicho cargo.

Desarrolló luego las gestiones internas de la Municipalidad para la elección de un Alcalde Suplente, resultando electo Ignacio Pozo con fecha 04 de agosto de 2020, quien dispuso con fecha 17 de agosto de 2020 la remoción del cargo de Administradora Municipal de la demandante.

Explicaba posteriormente la normativa aplicable al cargo de la actora, en particular las normas pertinentes de la Ley 18.695, las cuales por especialidad son de aplicación preferente a la Ley 18.833. Luego, siendo el cargo de Administrador Municipal de exclusiva confianza, resultaba que el mismo sólo se mantiene en el puesto mientras cuente con la confianza del Alcalde, pudiendo ser removido por éste o por acuerdo de 2/3 de los concejales en ejercicio. De esta forma, la determinación tomada por el Alcalde Suplente de remover a la funcionaria se ajustó plenamente a Derecho.



En cuanto a la supuesta vulneración de Derechos Fundamentales, en referencia a la afectación al art. 19 N° 1 de la Constitución, por haber estado con licencia médica la denunciante, planteaba que conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que invocaba, esta circunstancia no era óbice para que se pudiera decretar su remoción, siendo esta formalmente procedente incluso en el escenario que alegaba la actora.

Por otra parte, en cuanto a la supuesta discriminación y falta de motivación, reiteró la naturaleza de cargo de exclusiva confianza que ostentaba la demandante, habiendo sido dictado un acto suficientemente motivado en relación al mismo, sin que pueda alegarse en este caso alguna decisión discriminatoria.

Finalmente, alegaba que en este caso debía ser rechazada la demanda en todas sus partes, negando lugar a las pretensiones, con expresa condena en costas.

TERCERO: *Hechos no controvertidos.* Que en la audiencia preparatoria, se estableció como convención probatoria “que la denunciante realizaba funciones de administradora municipal”.

CUARTO: *Hechos a probar.* Que en la mencionada audiencia, conforme lo dispone el artículo 453 N° 3, del Código laboral, se fijaron los siguientes puntos de prueba:

1. Efectividad de haber incurrido la demandada en actos vulneratorios de derechos fundamentales con ocasión del

despido; en la afirmativa, hechos y circunstancias que lo constituyen.

2. Efectividad de adeudarse a la trabajadora las prestaciones e indemnizaciones solicitadas; en su caso, periodos y montos.

3. Base de cálculo para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo. Hechos y circunstancias.

QUINTO: Prueba rendida. Que en las audiencias de juicio las partes rindieron la siguiente evidencia:

I. LA DENUNCIANTE.

A) Documental.

1. Licencias médicas otorgadas a la denunciante en los meses de julio y agosto de 2020. 2. Copia de envío por Correos de Chile de Decreto de remoción de la demandante como Administradora Municipal. 3. Decreto 77/2020. 4. Decreto 764/2020. 5. Correos electrónicos en que consta el pago de las remuneraciones correspondientes a mayo, junio y julio de 2020. 6. Publicaciones de El Regionalista y Soy Chile, sobre designación de nueva administradora municipal, de 18 de agosto de 2020. 7. Boletín Parcial N° 1 del Servicio Electoral, en que consta que la denunciante fue candidata a diputada en el cupo del partido político Unión Demócrata Independiente.

B) Confesional.

No compareció el absolvente Wilson Díaz Vásquez, en representación de la Ilustre Municipalidad De Antofagasta, se solicitó se hiciera efectivo el



apercibimiento legal contemplado en el artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, el Tribunal dejó su resolución para la sentencia definitiva.

C) Testimonial.

Comparecieron y declararon ante el Tribunal, previamente juramentados y bajo apercibimiento del artículo 209 del Código Penal, los siguientes testigos:

1.- Pablo Toloza Fernández, C.I N° 11.736.541-7, Abogado, con domicilio en Jorge Washington 2675 oficina 1105, Antofagasta.

2.- Daniel Andrés Guevara Cortes, C.I N° 7.699.367-k, abogado, domiciliado en Avenida Croacia N°0310, depto. 201, Antofagasta.

3.- María Cecilia Rivadeneira Morales, C. I. N° 8.375.003-3, secretaria, domiciliada en psje. Matías Rojas N° 446, sector Favorecedora, Antofagasta.

D) Oficios.

Oficios de FONASA (folio 58); de Dirección de Gestión de Personas de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta (folio 54 y 55); y de Dirección de Control de la IMA (folio 69 y 72).

E) Exhibición de documentos.

La denunciaba acompañó al proceso, a petición de la demandante, los siguientes instrumentos:

a. Decreto de nombramiento de la denunciante como Administradora Municipal.

b. Decreto de remoción de la denunciante como Administradora Municipal.

c. Liquidaciones de remuneraciones (o equivalente) correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2020.

d. Comprobante de pago de remuneraciones de los meses de mayo, junio y julio de 2020.

e. Dineros recibidos de la entidad previsional correspondiente y/o COMPIN en relación a las licencias médicas de la denunciante, con indicación de licencia a la que corresponde, durante el año 2020.

II. LA DENUNCIADA,

A) Documental.

1. Decreto Alcaldicio N°77/2020, de fecha 24-ene-2020, que nombra en calidad de Administradora a la denunciante.
2. Decreto Alcaldicio 743-20 de fecha 31-jul-2020, que deja constancia Incapacidad Temporal Dña. Karen Rojo V. para ejercer cargo Alcaldesa.
3. Decreto Alcaldicio N° 764/2020, de fecha 17 de agosto de 2020, que dispone la remoción de la denunciante en el cargo de administradora municipal.
4. Noticia del medio digital "el Diario Antofagasta", sobre los nombramientos de los cargos de confianza del alcalde suplente Ignacio Pozo, se adjunta link y formato pdf de la noticia.
<https://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/123528/alcalde-suplente-de-antofagasta-ignacio-pozo-establece-suequipo-de-confianza/>
5. Informe de estado de



situaciones medicas de las licencias médicas del año 2020 de doña Claudia Meneses. 6. Set de liquidaciones de sueldo de todo el período que prestó servicios a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, enero a agosto del año 2020, ambas fechas inclusive. 7. Decreto Alcaldicio N° 1189/2020, de fecha 01 de diciembre de 2020, que dispone que asume en calidad de alcalde titular don Wilson Díaz Vásquez por la renuncia al cargo de doña Karen Rojo Venegas. 8. Comprobantes de transferencias de fondos realizados por la Municipalidad de Antofagasta a la denunciante, del mes de enero a agosto de 2020.

B) Testimonial.

Comparecieron y declararon ante el Tribunal, previamente juramentados y bajo apercibimiento del artículo 209 del Código Penal, los siguientes testigos:

1.-Don Ignacio Javier Pozo Piña, Rut.18.918.233-3, Estudiante, con domicilio en calle Osorno N°5119, Antofagasta.

2.-Don Cristhian Flores Alvarado, Rut.16.051.492-2, Abogado, con domicilio en Av. Séptimo de línea 3505, Antofagasta.

SEXTO: Observaciones a la prueba y alegaciones de clausura. Que concluida la recepción de la prueba, conforme lo dispone el art. 454 N° 9 del Código del trabajo, se dio la palabra a las partes para sus observaciones a la prueba y palabras de cierre.



Indicaba el actor que en el caso de autos no podía entenderse como justificada la remoción de una funcionaria, aun cuando sea de exclusiva confianza, si ello fue sin una mínima justificación y menos aun cuando la trabajadora estaba en uso de su licencia médica. Agregaba que no se controvertía la condición de funcionaria de exclusiva confianza ni que el Alcalde careciera de dicha potestad, sino que el asunto es que el uso de esas facultades debía efectuarse con estricto apego al Derecho y respetando los Derechos Fundamentales. Expresaba que era relevante el mérito de la declaración del que fuera el Alcalde Suplente quien decidió la remoción, quien no expresó de ninguna forma una pérdida de confianza para la desvinculación, sino que se asociaba a que estaba con licencia médica, siendo un tema de necesidad y no de pérdida de confianza. Unía a lo anterior el hecho que otro de los testigos expresó que era posible -aun cuando excepcional- encomendar funciones a otro. Planteaba que la jurisdicción de la Contraloría General de la República no podía utilizarse como una excusa válida para avalar la remoción de una persona que estaba en uso de su licencia médica. Por todo lo anterior, concluía señalando que la remoción no fue realmente por pérdida de confianza, sino que por otros móviles que no se transparentaron en el decreto y que lo fue durante su licencia médica, en una forma que claramente vulneró sus Derechos Fundamentales, lo que -dada la forma en que se enteró- afectó en su salud física y psicológica; y, en cuanto a la diferencia de sueldo que



no se le pagó, indicaba que hay evidencia que en los meses de agosto y septiembre hubo dineros entregados por la entidad previsional que no fueron enteradas. Finalmente, pidió que se acogiera la demanda en todas sus partes, con costas.

Por su parte, la denunciada hacía mención a los puntos de prueba que enmarcaban el debate a la luz del libelo de la demandante, insistiendo que era un cargo de exclusiva confianza, lo que permitía la remoción en la forma que ocurrió, siendo ajustado a Derecho y completamente legítimo. Manifestaba que, además, este cargo era de una naturaleza eminentemente política, por lo cual no podía utilizarse como argumento para condenar a la Iltre. Municipalidad que haya habido un potencial matiz político en la decisión. Citaba, luego, la jurisprudencia administrativa y judicial que respaldaba la legitimidad del actuar de su parte. Controvertía cualquier filtración de información sobre la remoción previos a que se dictara el acto administrativo. Finalmente, con respecto al oficio de devolución de subsidios, ello se hizo conforme a la legislación vigente. Por todo lo anterior, pedía el rechazo de la denuncia, con costas.

SÉPTIMO: Hechos dados por acreditados. Que, analizada la prueba rendida en juicio, valorada conforme a las reglas de la sana crítica, según lo dispone el art. 456 del Código del trabajo y considerando particularmente el estándar aplicable al caso, a la luz de lo dispuesto en el art. 493 del mismo cuerpo legal, unido al



apercibimiento que ha de operar en contra de la denunciada por su rebeldía a absolver posiciones, se han podido dar por establecidos los siguientes hechos:

1. Que Claudia Andrea Meneses Oliva desempeñó las funciones de Administradora Municipal Titular de la Iltre. Municipalidad de Antofagasta, desde el 27 de enero de 2020 y hasta el 17 de agosto de 2020.

2. Que la demandante fue removida de su cargo por medio del Decreto N° 764/2020 R, de fecha 17 de agosto de 2020, suscrito por el Alcalde Suplente de la Iltre. Municipalidad de Antofagasta, Ignacio Pozo Piña, a partir de esa misma fecha, sin haber expresión clara, específica y explícita en el acto administrativo de la razón que motiva la desvinculación y bajo la "implícita" y aparente argumentación de pérdida de confianza, sin perjuicio que lo que realmente motivó la remoción fue la necesidad provisoria de contar con otro administrador por la licencia médica de la demandante.

3. Que al momento de dictarse el Decreto antes referido, la demandante se encontraba haciendo uso de licencia médica, con reposo iniciado el 27 de julio de 2020, con duración inicial de treinta días; y el mismo fue extendido, a partir del 26 de agosto de 2020, por otros treinta días.

4. Que Ignacio Pozo Piña, Alcalde Suplente de la Iltre. Municipalidad de Antofagasta al tiempo de la remoción de la actora y quien suscribió el respectivo acto administrativo, llamó telefónicamente a la denunciante,



durante la vigencia de su primera licencia médica, plenamente consciente que estaba con reposo, para consultarle cuándo finalizaba su licencia y cuándo volvería.

5. Que la última remuneración mensual de la denunciante - por mes completo- ascendió a un total de haberes de \$5.943.886.- (cinco millones novecientos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y seis pesos), en el mes de julio de 2020.

6. Que con respecto a la remuneración del mes de agosto de 2020, se pagaron a la actora 16 días de remuneración, por un total de haberes de \$2.122.086.-, pagando un líquido (menos descuentos legales) de \$1.706.157.-

OCTAVO: Con referencia a las funciones que desarrolló la actora y los márgenes temporales de la misma. Que en primer lugar, conviene partir recordando que se estableció como convención probatoria, en el considerando tercero, "que la denunciante realizaba funciones de administradora municipal", es decir, desde ya, la función desarrollaba no es un tema controvertido, ya que ambas partes coinciden y aceptan explícitamente el cargo servido.

No obstante, para precisar los contornos de esta convención, se hace necesario el basamento de algunas de las evidencias allegadas a autos.

Así, por una parte, en cuanto a los márgenes temporales del cargo de administradora municipal, son de relevancia tanto el Decreto N° 77/2020 R de fecha 24 de



enero de 2020, firmado por Karen Rojo Venegas, a la fecha Alcaldesa Titular de la Iltre. Municipalidad de Antofagasta, por el cual nombraba a Claudia Andrea Meneses Oliva Administradora Municipal Titular, a contar del 27 de enero de 2020; y, por otra parte, el Decreto N° 764/2020 R, de fecha 17 de agosto de 2020, firmado por Ignacio Pozo Piña, a la fecha Alcalde Suplente de la Iltre. Municipalidad de Antofagasta, por el cual removía a contar de esa misma fecha a Claudia Andrea Meneses Oliva del cargo de Administradora Municipal.

Ambas evidencias son completamente claras, precisas, no siendo objetadas o controvertidas, ni habiéndose levantado alegación alguna para restarles valor, ni existiendo prueba en sentido contrario que les quite mérito, por lo que permiten -sobradamente en el estándar del art. 493 del Código laboral- establecer tanto la data de inicio (27 de enero de 2020) como de conclusión (17 de agosto de 2020) del vínculo de servicios de la actora con la denunciada.

Por lo demás, la misma evidencia aclara un punto no tan diáfano, aun cuando implícito en la convención probatoria, i.e. cuál era la Municipalidad en la que servía el cargo de Administradora la demandante, ciertamente que se podría haber recurrido al sentido común (aun cuando "*le bon sens est le moins commun des sens*", parafraseando a VOLTAIRE), basado en los márgenes de la *litis* que nos imponían los escritos posicionales de las partes y la identidad de los intervinientes, pero lo cierto es que no está demás destacar que los instrumentos



señalados especifican taxativamente y sin atisbo de duda que la función lo era para la Il. Municipalidad de Antofagasta.

NOVENO: *Con referencia a la remoción de la denunciante y "sus accidentes".* Que convienen aquí una atomización de los tópicos que contiene el enunciado dado por probado

A. Sobre la remoción en sí misma.

Sirva acá -antes que todo- el último de los actos administrativos antes mencionados, i.e. el Decreto N° 764/2020 R, datado al 17 de agosto de 2020 y firmado por el Alcalde Suplente de la época, Ignacio Pozo Piña.

El instrumento mismo es claro en establecer aspectos como su fecha de emisión (17 de agosto de 2020), la causal de conclusión del vínculo funcionario entre la actora y la denunciada (remoción) y la data en que ello ocurre ("a contar de la fecha del presente decreto").

Se une a lo anterior -principalmente en cuanto a establecer la existencia de la remoción- el mérito de la declaración de los testigos Pozo y Flores, ambos presentados por la denunciada, quienes ratifican que la demandante fue removida de su cargo de administradora.

Por lo demás, el asunto asociado a la conclusión del vínculo de servicio, el instrumento jurídico utilizado y los datos del acto administrativo que lo contenía son relativamente armónicos a la luz del contenido de los escritos de demanda y contestación, no requiriéndose mayor análisis de prueba en el punto específico, más aún



bajo el degradado estándar de convicción que dispone el legislador en un proceso de tutela de Derechos Fundamentales.

B. Acerca de "los accidentes" que rodearon la remoción.

B.1. La falta de expresión explícita del fundamento.

Se ha dado por consolidado que el acto administrativo que dispone la remoción, el Decreto N° 764/2020 R, de fecha 17 de agosto de 2020, no expresa clara, puntual y específicamente la causal por la cual se dispone el fin de la relación funcionaria de la denunciante con la Ilustre. Municipalidad de Antofagasta, es decir, el por qué se dispone la remoción, cuestión que se colige de la sola lectura del instrumento.

En efecto, de la revisión de su texto explícito no hay ni una sola mención clara, directa, inmediata y específica donde la autoridad manifieste (con la debida responsabilidad, formalidad y transparencia) que la causal de remoción es haber perdido la confianza en la servidora pública (o alguna expresión análoga y lo suficientemente dacrónica), no siendo aceptable la tesis del "contenido implícito" del acto que mencionó la defensa del municipio que se daría de una lectura integrativa del texto, por cuanto, estando frente a un instituto de Derecho Administrativo, como lo es un Decreto Municipal del propio Alcalde, y con la trascendencia que tiene una decisión que implica concluir drásticamente la vinculación de un funcionario de tanta importancia en la estructura del Municipio, era esperable

y exigible a la autoridad ser tajante y decidido en las formas, cuestión que por lo demás es acorde con las exigencias que impone el art. 3° de la Ley 19.880 cuando define la esencia de todo acto administrativo en cuanto son “*las decisiones formales que emitan [las autoridades públicas]*”.

B.2. La razón aparente y la subyacente.

Aun cuando la razón implícita de la remoción (que defiende la denunciada en una interpretación holística del decreto municipal) sea la pérdida de confianza, lo cierto es que la evidencia no respalda ni siquiera ese fundamento tácito.

Destaca en este punto la propia declaración de Ignacio Pozo Piña, actual concejal del Municipio de Antofagasta, quien al 17 de agosto de 2020 era el Alcalde Suplente y firmó el Decreto N° 764/2020 R, que dispuso la remoción de la actora, testigo el cual fue extremadamente insistente en que no tenía ni tiene ningún problema con la denunciante, manteniendo una excelente relación con la misma, que no hubo ningún reproche que él pudiera hacer a su labor, que la diferencia de militancia política entre ella y él no le afectaba ni complicaba para el desempeño del cargo y, lo más sorprendente (que se desarrollará en mayor detalle *infra*), que incluso la llamó mientras estaba con licencia médica para preguntarle cuando se reincorporaría y le hizo presente que incluso sería reintegrada cuando volviera de su licencia.



Este testigo es del todo esencial para calificar lo que pasó, por cuanto, primero que todo, era el Alcalde Suplente y fue quien firmó el acto administrativo de desvinculación, "*under his command and by his sole will*" (parafraseando al duque de MARLBOROUGH) se tomó la decisión de la desvinculación, ¿quién mejor que él (mejor dicho, quién sino él) debía haber perdido la confianza para remover a la denunciante?

Pues bien, esta persona expresó en estrados y bajo juramento tener una excelente relación, pasada y presente con la actora, no tener reproche a la forma en que desempeñó su función, haberla llamado mientras estaba con licencia médica para saber cuándo se iba a reincorporar y -cuando supo que licencia se iba a extender- haberle dicho que la reintegraría a labores cuando volviera de su licencia sin perjuicio de requerir nombrar a otro administrador en el ínterin... *res ipsa loquitur*, nadie que ha perdido la confianza en otro realiza siquiera una sola de las acciones de crédito, respeto y valoración que él hizo con la denunciante, o no la llama por no interesarle si vuelve o no de licencia médica, o no le pregunta cuándo vuelve, ya que es lo que menos quiere, o no le ofrece la posibilidad de reintegrarla cuando vuelva, ya que la quiere lo más lejos posible del servicio; y, por cierto, salvo por ironía o hipocresía (que no se advirtieron o alegaron por la denunciada), no señala que tiene una excelente relación con esa persona ni mucho menos que no tenga algún reproche a la forma en que ejerció su función. Por cierto, no se trata de entender



que la pérdida de confianza deba ser exteriorizada con las reacciones de HITLER respecto de sus generales luego del desastre de Stalingrado, pero al menos se espera un aire parecido al de CHURCHILL cuando hubo de enviar al Duque de WINDSOR a Las Bahamas (donde haría menor daño que volviendo a Buckingham por su ineptitud diplomática en Europa)... Algo de recelo, molestia, incomodidad, disgusto, tedio o hastío ha de haber que nos indique la falta de confianza, más aún si la expresión misma u otro análoga no fue utilizada en parte alguna del decreto en forma explícita y el testigo cuidó de no proferirla en su deposición.

Ahora luego, de la misma declaración del testigo se advierte -entre líneas- lo que realmente se puede inferir ocurrió, más bien asociado a la necesidad de solucionar un problema puntual de gestión, ante la ausencia por licencia médica de la Administradora, que se extendería por otro mes, siendo un cargo que no tiene subrogante, lo que hacía que el Alcalde no pudiera delegar labores (salvo por medio del recurso de encomendar funciones, posible pero incómodo y poco práctico, según se desprende de los dichos del testigo Flores), decidiendo la autoridad la remoción no por falta de confianza sino que por una necesidad de gestión puntual y acotada al tiempo de la licencia médica, pero, para mal de la denunciada, manteniendo realmente la confianza en la funcionaria (o, si se prefiere en negativo, no habiéndola perdido) e, incluso, con la difusa oferta de reintegración al término de la licencia.



Por otra parte, para refrendar la conclusión factual antes desarrollada, no podemos dejar pasar por alto el hecho que citado a absolver posiciones, legalmente notificado y apercibido, el Sr. Alcalde en ejercicio de la Ilustre. Municipalidad de Antofagasta no compareció ni hizo se presentara persona alguna con facultades para ello, de manera que ha de operar en contra de la denunciada el apercibimiento dispuesto en el art. 454 N° 3 del Código del trabajo, permitiendo presumir como efectivas las alegaciones de la contraria en referencia a los puntos de prueba, en particular, que la remoción no se dio por un tema real de pérdida de confianza.

Finalmente, hacernos cargo de la explicación (pues no alcanza para justificación) que dio el abogado de la Municipalidad, en referencia a que el Sr. Alcalde no compareció por no ser él quien firmó el Decreto de remoción y no tener conocimientos en la materia. Frente esta argumentación recordar, en primer lugar, que una persona citada a absolver debe comparecer, salvo que se dé una especial causal legal que lo exima de esa carga, cosa que ni se alegó ni probó, y -aun en esos casos- la licencia que da el ordenamiento jurídico (vid art. 389 del Código de procedimiento civil) es el lugar donde declarará, pero no una *carte blanche* para decidir simplemente no comparecer al juicio, de manera que cuando el edil simplemente desobedece el llamamiento a confesar, válidamente citado y apercibido, debe soportar las consecuencias de su decisión (nótese que tampoco la ausencia trató de ser explicada por licencia médica,



permiso administrativo o feriado legal, compromiso funcionario ineludible o alguna disculpa intersubjetivamente compartible). De la misma manera, ha de tenerse presente que la argumentación de no haber firmado el decreto de remoción o no saber nada al respecto tampoco son aceptables para legitimar su ausencia, ya que la denunciante pidió y el Tribunal ordenó la presencia de la parte denunciada a absolver posiciones, teniendo el derecho a interrogarlo, en la línea que estimara conveniente (siguiendo las pautas del numeral 4° del art. 454 del Código del trabajo) y de esa manera obtener alguna información que pudiera reforzar su teoría del caso, todo de forma de hacer efectivo el debido proceso, en su aspecto de derecho a ofrecer prueba, presentar la prueba y poder examinar la prueba, garantizado a nivel Constitucional en el art. 19 N° 3 de la Ley Fundamental... al no venir el alcalde, sin justificación legal (en realidad, sin siquiera disculpa legal), cercena ese derecho fundamental, impide a la parte el ejercicio del interrogatorio y obtener información (o trazos de ella) que le vayan permitiendo consolidar su narrativa, más grave aún en un proceso de vulneración de Derechos Fundamentales, en donde tan difícil es obtener la evidencia y la propia Ley ha establecido por ello un estándar de convicción degradado a la sola presencia de indicios, conforme el art. 493 del Código laboral, de manera que el ejercicio de la absolución era extremadamente importante. Para concluir, hay que considerar que aceptar y validar que alguien no



comparezca a absolver posiciones -siendo el Jefe del servicio o detente la calidad patronal del art. 4° del Código laboral- por su exclusiva argumentación que no sabe, por temas temporales u otros formales, detalles del suceso *sub iudice* es inaceptable, ya que le auto otorga una "inmunidad" que ni el propio ordenamiento jurídico confiere, siendo que lo correcto es que la persona tenga la responsabilidad y deferencia procesal de concurrir, soportar el interrogatorio y responder honestamente las preguntas y, si no sabe o no recuerda, responder conforme a la ignorancia o el olvido, lo que será valorado por el Tribunal conforme la pauta del art. 454 N° 3 inc. 1° del Código del ramo, pero no auto atribuirse el ilícito privilegio -como una especie de ciudadano por sobre la Ley- de no ir por estimar él, por si y ante sí, bajo su real saber y entender, que nada útil pueda aportar.

Por todo lo dicho, como ya se adelantó, ha de operar el apercibimiento de la *ficta confessio*, presumiendo como efectivas (y, por cierto, unidas a las evidencias positivas antes referidas) que la remoción de la denunciante no se dio realmente por pérdida de confianza, que esa nunca fue la motivación real y que lo ocurrido fue un tema de gestión interna, donde -por el tiempo que se extendía la segunda licencia de la actora- se buscó nombrar a otro administrador, pero existiendo la "oferta" de reintegrar a la demandante una vez concluida su licencia médica.

DÉCIMO: En cuanto a la licencia médica que cursaba la denunciante al momento de dictarse el acto administrativo



de remoción y la licencia que siguió a aquella. Que el punto, en general, tampoco es mayormente controvertido por las partes, ya el propio libelo de demanda hace mención a que la funcionaria estaba con licencia médica desde el 27 de julio de 2020, por 30 días, presentándose una nueva licencia a partir del 26 de agosto de 2020, por otros 30 días; y, por su parte, en la contestación la denunciada hace mención a estas mismas licencias médicas.

Ahora bien, en todo caso, a efectos de salvar cualquier duda, la actora acompañó al juicio como prueba instrumental la copia de licencia médica N° 3 042317427-7, otorgada a su persona con fecha 25 de julio de 2020, con vigencia a partir del 27 del mismo mes, por un tiempo de reposo laboral total de 30 días, en su domicilio, por enfermedad o accidente común; y, además, la copia de licencia médica N° 3 043246128-9, otorgada a su persona con fecha 25 de agosto de 2020, con inicio de reposo a partir del 26 de agosto de 2020, ordenando reposo laboral total, en su domicilio, por enfermedad o accidente común, por un nuevo período de 30 días.

Esta evidencia documental no fue controvertida ni cuestionada por la contraria, por lo que dada su claridad y precisión es holgadamente suficiente para establecer el punto que al 17 de agosto de 2020 (fecha de expedición del decreto de remoción a que se ha hecho referencia más arriba) la demandante estaba en medio de la primera licencia médica, la cual vencía el 25 de agosto de 2020, siendo seguida por una inmediata nueva licencia, a partir del 26 de agosto de 2020, por otros 30 días.



Por lo demás, la circunstancia de que la remoción se dio cuando la actora estaba cursando una licencia médica es refrendada por todos los testigos, tanto de cargo como de descargo, siendo todos contestes en el punto.

En definitiva, la prueba sobre el contexto en que se dio la remoción, conforme lo dado por consolidado, es abundantemente suficiente en el estándar legal propio de un proceso de tutela laboral.

UNDECIMO: *En referencia a las actuaciones de Ignacio Pozo Piña al tiempo de la remoción de la denunciante y la calidad que revestía aquel.* Que conforme el tenor de los escritos posicionales de las partes, es un hecho incontrovertido que Ignacio Pozo Piña revestía la calidad de Alcalde Suplente a la fecha de dictación del acto administrativo de remoción de Claudia Andrea Meneses Oliva. Unido a ello, se refrenda lo anterior con el mérito del Decreto N° 746/2020 R, de fecha 17 de agosto de 2020, de la Ilustre. Municipalidad de Antofagasta, el cual contiene la decisión de remoción de la denunciante, que aparece rubricado por el antes mencionado, explícitamente en calidad de "Alcalde Suplente". Y, finalmente, lo anterior es ratificado por la deposición de Toloza (testigo de la demandante), del propio Pozo y de Flores (los dos últimos testigos de la denunciada), todos los cuales dan cuenta que la remoción se basó en la decisión de Pozo, quien a la fecha ostentaba la calidad de Alcalde Suplente.



Luego, con este cúmulo de pruebas, está suficientemente justificado que el antes mencionado, en su calidad de Alcalde Suplente, con fecha 17 de agosto de 2020, firmó el acto administrativo de remoción de Claudia Andrea Meneses Oliva.

Dicho lo anterior, es del caso detenerse en las conductas que antecedieron a la firma del mencionado decreto de remoción, por cuanto son elocuentes del real estado de "confianza" entre Meneses y Pozo y, según se dirá, de una serie de conductas que afectaron Derechos Fundamentales de la actora.

No es necesario reiterar lo ya dicho anteriormente sobre las más que positivas opiniones que el testigo tenía de la denunciante y que se detallaron *supra*, las cuales, como se dijo, denotaban todo lo contrario a una pérdida de confianza, sino que es del caso centrarnos en sus acciones en los días inmediatamente previos a que dictara el decreto de remoción.

Nos dijo el testigo que habiendo asumido como Alcalde Suplente el 04 de agosto de 2020 (lo que es corroborado por el tenor de la contestación y los dichos del testigo Flores), pasado algunos días, llamó por teléfono a la denunciante (quien estaba con licencia médica y sabiendo él dicha condición), tratando con ella la fecha de su regreso y consultando cuándo volvería a su cargo (es decir, tocando temas directamente ligados a la función para la cual tenía la licencia) y que como ella le manifestó que la licencia se iba a prorrogar le



informó que “dejaría desierto el cargo” para nombrar a otro administrador, “a la espera que volviera” (¡¡¡¿¿¿???!!!).

Esta sorprendente información (y no en el buen sentido de la palabra) emana directamente de quien fuera el Alcalde Suplente a la fecha y quien firmó el decreto de remoción de la actora, razón por la cual, siendo un dato de primera fuente, de la persona misma que incurrió en la conducta, reconociendo hechos personalísimos, con peligrosa candidez, siendo un testigo presentado por la propia demandada (que es “doblemente venenoso” contra sus intereses) no podemos sino darle absoluto crédito en lo que dijo e hizo, quedando como consolidado con enjundiosa suficiencia en el estándar legal del art. 493 del Código laboral que llamó a la demandante, mientras estaba con licencia médica, sabiendo que estaba cursando la misma, para tratar temas específicos del ámbito laboral, consultando por su regreso a funciones, manifestándole que debería “dejar desierto el cargo” por la prórroga del reposo médico, pero que le permitirían reincorporarse cuando concluyera su licencia...

DUODÉCIMO: Sobre el total de la última remuneración mensual percibida por la demandante. Que para el establecimiento de este punto se ha tenido en especial consideración el mérito de la liquidación de sueldo del mes de julio de 2020, último que sirvió completamente la funcionaria, la cual fue aportada al juicio como exhibición de documentos por la propia Municipalidad, a instancias de la actora, instrumento que es categórico en



señalar que el total de haberes que Claudia Andrea Meneses Oliva obtuvo en el mes de julio de 2020 ascendió a la suma de \$5.943.886.- (cinco millones novecientos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y seis pesos).

La referida información no fue controvertida ni por alegación alguna ni por evidencia en sentido contrario, permitiendo dar por probado el punto, sin perjuicio de lo que se resuelva *infra* a la luz de las pretensiones de la demandante y con la finalidad de evitar una causal de nulidad por *ultra petita* respecto de las indemnizaciones.

DÉCIMO TERCERO: *Sobre las remuneraciones que fueron pagadas a la denunciante en el mes de agosto de 2020.* Que conforme el mérito de la liquidación del mes de agosto de 2020, la cual fue exhibida por la denunciada a solicitud de la actora, se le pagaron a ésta un total de 16 días de remuneraciones, por una suma total de \$2.122.086 (dos millones ciento veintidós mil ochenta y seis pesos) y dando un líquido (menos descuentos legales) de \$1.706.157.- (un millón setecientos seis mil ciento cincuenta y siete pesos).

La claridad de la evidencia instrumental, dada su precisión y falta de alegación o prueba en contrario, permite dar también por consolidado el punto.

DÉCIMO CUARTO: *En cuanto a las razones por las cuales la remoción no es legítima.* Que conforme lo dado por establecido en el considerando séptimo, en particular en sus puntos 2 al 4, como primera cuestión y desde ya, debemos partir insistiendo que no se plantea que el



Alcalde no goce, conforme al art. 30 de la Ley 18.695, de la facultad de remover al Administrador Municipal por haber perdido la confianza en el mismo, por cuanto el cargo es justamente de aquellos que -valga sea la redundancia- son de exclusiva confianza y se mantienen en funciones mientras cuenten con el crédito de la autoridad municipal. Lo que se controvierte es que dicha decisión de remoción -dicha especial causal de cese del vínculo funcionario que es excepcionalmente aplicable a específicos y determinados funcionarios- debe darse estrictamente por dicha causal, cuando ella ha sido correctamente aplicada, respetando las formalidades esenciales del acto administrativo que, como tal y según dispone el art. 3° inc. 2° de la Ley 19.880, es esencialmente un acto formal.

En este caso y como indicáramos más arriba, el acto administrativo mismo adolece de un defecto de explicitud, ya que en su propio cuerpo, en parte alguna de él, se menciona que la remoción se haya producido por "haber perdido la confianza", "no contar con la confianza", "haber cesado la confianza" u otro sinfín de combinaciones que mentes no necesariamente imaginativas podrían haber conjugado para revelar la razón del fin de la vinculación funcionaria. Valga también aquí manifestar que no es que este sentenciador entienda necesario una "biografía de errores o fracasos" del funcionario que fundamenten la pérdida de confianza, ni un detalle de desencuentros u otros mil defectos que el alma humana no sea capaz de perdonar en un subalterno (salvo el benigno



TITUS AURELIUS FULVUS BOIONIUS ARRIUS ANTONINUS), lo que simplemente se pide es que se tenga la claridad, responsabilidad y respeto de decirle (a quien va quedar -al final del día- cesante y sin fuente de ingresos) que "sus servicios ya no son requeridos por cuanto hemos perdido la confianza en usted" (o algún otro eufemismo), cuestión que, amén de una mínima consideración, resulta ser una exigencia de forma del acto administrativo de remoción, del todo armónica con los principios de transparencia, publicidad y fundamentación que imponen no sólo el art. 16 de la Ley 19.880, sino que el art. 3° de la Ley 18.575 y artículos 6 y 7 de la Ley Fundamental, sobre todo si no perdemos de vista que los funcionarios de exclusiva confianza son extremadamente excepcionales en las plantas de los servicios públicos y, por lo tanto, al estar sujetos a un régimen excepcional y tan endeble, debe operarse con un estricto y delicado apego a la legislación para la validez del acto de la desvinculación.

Luego, formalmente y conforme a lo dado por probado, en primer lugar, entiende este sentenciador que el acto de remoción no cumplió con la mínima exigencia de dar cuenta de su causal habilitante, cual era, simple, lisa y llanamente (sin cuota de imaginación ni desarrollo) haber expresado taxativa y claramente en el decreto de remoción que el Sr. Alcalde había perdido la confianza.

Acá la imaginación, el sentido implícito o la labor de reconstrucción integradora no pueden salvar las omisiones de un acto jurídico por definición formal y estricto, menos en perjuicio de un trabajador tan



inestable como lo es una de "exclusiva confianza", que, al final del día, "queda a la buena o mal digestión del Jefe del Servicio" (pero, concedámosle al menos, que pueda saber a qué *impasse* gastrointestinal le debe el quedar en la calle).

Por otra parte, aun cuando pudiéramos aceptar, sólo para efectos de análisis teórico y completitud de la argumentación, que si bien el acto administrativo de remoción no teniendo mención explícita a la pérdida de confianza como causal fundante de la conclusión de la relación laboral aun así fuera suficiente, por cuanto "se desprendería del mismo", "dadas las expresiones utilizadas", "en forma implícita", "por las menciones normativas" que lo que operó fue una remoción por pérdida de confianza, aun así, como ya se expresó *supra* en el considerando séptimo puntos dos y cuatro, igual no podríamos entender legítima la exoneración de la denunciante, dado el abismo entre lo que "deberíamos entender que fue el fundamento del decreto" y lo que realmente motivó el mismo.

Es importante tener presente que el Alcalde Suplente que firmó el cuestionado decreto de remoción señaló bajo juramento en estrado que tiene una excelente relación con la demandante, que no tiene problemas con ella, que tampoco tuvo objeciones a su trabajo, que se contactó con la funcionaria para consultarle cuándo concluiría su licencia médica y cuándo volvería, y que, incluso, sólo cuando ésta le manifestó que iba a prolongar un mes más su reposo médico le dijo que "debería dejar desierto el



cargo" para nombrar a otro administrador, pero que la estarían esperando para que se reintegrara... como ya desarrollamos latamente en la valoración de la prueba anteriormente, todas y cada una de las conductas que reconoció quien fuera el Alcalde Suplente, en forma directa e inmediata, días antes de la remoción, dan cuenta de una situación de crédito, respeto y valoración por la funcionaria, en las antípodas de la pérdida de confianza que se "utiliza" (en una forzada interpretación implícita) en el decreto de remoción. Más aun, sólo para no dejar duda, al deponer en juicio Pozo en ninguna sola parte de su declaración dejó siquiera entrever alguna mínima expresión que pudiese hacer pensar que siquiera cruzó por su mente realmente que Meneses Oliva no merecía su confianza para seguir desarrollando el cargo de Administradora Municipal.

Valga aquí, como ya expusimos anteriormente, que el *leitmotiv* que impulsó a tomar la decisión de remoción fue que la actora estaba con licencia médica, que no iba a volver en el tiempo inmediato y que se requería a alguien para cumplir ciertas funciones, es decir, un fundamento de necesidad de gestión, puntual y acotado, tan puntual y acotado que el testigo Pozo, en su calidad de Alcalde Suplente, reconoció expresamente que le manifestó a Meneses Oliva que cuando concluyera su licencia médica podría ser reintegrada, lo que refuerza la idea que no hubo una pérdida de confianza en su persona que fuera un efectivo fundamento para su remoción, más allá que el concepto no fuera explícita y abiertamente usado en el



decreto, lo que ocurrió es que nunca estuvo siquiera en la mente del Alcalde Suplente, haciendo completamente espurio el acto administrativo.

DÉCIMO QUINTO: *De la forma como la desvinculación se da en un contexto que afectó Derechos Fundamentales de la denunciante, en especial su derecho a la vida, a la integridad física y síquica.* Que conforme lo consolidado anteriormente, habiéndose concluido por este sentenciador que la remoción se dio en un contexto ilegítimo, que no respeto las mínimas exigencias formales de "enunciación" del fundamento explícito para desvincular incluso a un funcionario de exclusiva confianza y, peor aún, que se hizo bajo una "implícita pérdida de confianza" que nunca fue tal, encubriendo una necesidad de gestión puntual y específica; y considerando que conforme lo dado por establecido ello se dio justamente en relación a una funcionaria que estaba bajo licencia médica, con expresa indicación de reposo laboral total (sin perjuicio que fue contactada por el Alcalde Suplente para tratar temas del servicio) en su domicilio, tomando conocimiento por boca del mismo que dado que no volvería en tiempo pronto "iba a declarar desierto el cargo para nombrar a otra persona" (sin perjuicio de la exótica oferta de reintegración), siendo que luego de ello tomó conocimiento formal de su remoción (conforme copia del decreto alcaldicio que se le hizo llegar a su domicilio aun estando con licencia), no puede sino concluirse que se le generó un perjuicio que no debía soportar, tanto por no ser legítima la remoción en las formas y por los hechos en que se fundó, como por



estar con licencia médica, de manera que claramente su salud y, sobre todo, su integridad síquica se vio afectada (como por lo demás corroboran los testigos Rivadeneira y Guevara, quienes pudieron observar en primera persona el lamentable estado en que se encontraba la denunciante en esa tortuosa época, donde conjugó macabramente una larga licencia médica y una ilegítima exoneración).

Por lo anterior, no cabe duda que la ilícita acción de remoción que sufrió la actora implicó de parte de la denunciada, su empleadora a la fecha, violar -al menos negligentemente- sus deberes de no afectar el espacio emocional y moral de la trabajadora, sin perjuicio, por cierto, de ser un ser un evidente obstáculo a cualquier proceso curativo en curso que buscaba superar con el reposo ordenado por las licencias médicas, obligando a entender que la Iltre. Municipalidad de Antofagasta vulneró con ocasión de la ilícita remoción de la denunciante sus Derechos Fundamentales garantizados en el art. 19 N° 1 de la Ley Fundamental.

Por último, sólo una breve mención al momento mismo de la remoción, justamente en medio de períodos de reposos por licencias médicas, plenamente conocidos de la denunciada, que más allá de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que pudiera habilitarlo, lo cierto es que no es vinculante para el órgano jurisdiccional y estimando que hay razones y bienes superiores, asociados a la protección de la vida y la salud, impiden a este



magistrado entender legítimo en cualquier caso el ejercicio de la facultad de remoción frente a una persona que está cursando una licencia médica que busca su recuperación (aun siendo un funcionario de exclusiva confianza), por cuanto ello claramente conlleva afectar el proceso recuperativo, que requiere la mayor calma y tranquilidad posible, siendo una amenaza gravísima para la salud (sino para la vida) y, como ya se dijo, una intromisión muy intensa en la integridad psicológica del trabajador; y, en este caso, la falta es mayor aun si se considera que el acto mismo de remoción se ha calificado como ilegítimo por falta de fundamentación (tanto formal como en la realidad).

DÉCIMO SEXTO: *Sobre las razones por las que no se hará lugar a entender que haya habido vulneración a la garantía de igualdad y no discriminación.* Que al respecto, primero que todo, entre los hechos que han podido ser dados por acreditados *supra* no hay ninguno que permita inferir que la remoción fue discriminatoria, no habiendo prueba que apunte en este sentido y en la forma que -en este aspecto- fue articulada la demanda.

Por lo demás, siendo consecuentes, basados en la propia declaración del testigo Pozo (que tanto sirvió a la demandante), este señaló (con la misma candidez que nos hizo otras sorprendentes revelaciones) que no tenía problema alguno con la actora, que su relación era muy buena, que no tenía objeción a su trabajo, que su diversa afiliación política no era un obstáculo para el trabajo juntos, etc., todo ello -como aquello que anteriormente



ha perjudicado a la Municipalidad- es completamente creíble y no hay prueba alguna que permita una conclusión en sentido contrario a lo que nos dijo bajo juramento quien fuera el Alcalde Suplente que firmó el tan cuestionado decreto de remoción de la actora.

De la misma manera, debemos considerar, que como hemos dado por establecido previamente, la decisión de remoción, si bien no estaba correctamente basada (ni formalmente ni en la realidad) en una pérdida de confianza, tampoco lo fue en un tema meramente discriminatorio, sino que buscaba solucionar un puntual y acotado problema de gestión, por la falta que trajo la licencia médica de la actora, es decir, el favoritismo o el desencuentro político no fueron el motor de la decisión de remoción, que -aunque incorrecto- corrió por otros cauces.

Finalmente, en lo que sí podemos conceder a la defensa de la denunciada, es que no puede pasarse por alto -en abstracto- que frente a cargos de exclusiva confianza, vinculados a la administración comunal, nombrados directamente por una autoridad elegida popularmente, es de su esencia que la decisión de mantener o remover pase por un cálculo político, siendo legítimo y razonable que -por regla general- se elija a personas más afines a su sector que aquellas que militan en la "vereda de enfrente", por lo que si el decreto de remoción de la actora hubiera efectuado el mínimo ejercicio de explicitar que se había perdido la confianza unido a que el Alcalde Suplente hubiese testificado que



ello había sido efectivamente así, aun cuando se diera por divergencias políticas, no podría haber sido objeto de reproche judicial... *res aliter infeliciter omnibus*.

DÉCIMO SÉPTIMO: Sobre la procedencia y cuantía de las indemnizaciones a conceder. Que habiendo sido dado por establecido que la remoción de la actora se dio en un escenario que afectó sus Derechos Fundamentales, en especial a la salud y a la integridad física, según garantiza el numeral 1 del art. 19 del Código político y conforme lo dispone el art. 489 del Código del trabajo en su inc. 8°, al tratarse la exonerada de una funcionaria pública, se hará lugar al pago de la indemnización especial allí indicada.

Ahora bien, para su cuantificación, teniendo en cuenta el delicadísimo Derecho Fundamental afectado, cual es la salud e integridad síquica y la forma en que ello se dio, pero no abarcando la vulneración a otros Derechos también alegados, los cuales fueron descartados completamente, se establecerá el pago de sólo ocho remuneraciones.

Finalmente, sin perjuicio que el monto determinado en el considerando séptimo punto cinco da una base de cálculo superior, respetando el contradictorio y para evitar caer en un vicio de *ultra petita*, se fijará el monto remuneratorio en la suma de \$4.539.285.- (cuatro millones quinientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos), que es el que indica como base de cálculo la demandante; y, consecuentemente, los ocho



meses a pagar como indemnización se fijarán en la suma de \$36.314.280.- (treinta y seis millones trecientos catorce mil doscientos ochenta pesos).

DÉCIMO OCTAVO: *De las razones por las cuales no se dará lugar al pago de diferencias por conceptos de subsidios de licencias médicas.* Que entiende este magistrado que, bien o mal, la vinculación funcionaria entre la actora y la Iltre. Municipalidad de Antofagasta concluyó el 17 de agosto de 2020, conforme a la prueba rendida en autos (en particular el decreto de remoción), luego, el pago de sus remuneraciones sólo correspondía hasta esa data, lo que fue pagado según el mérito de la liquidación del mes de agosto de 2020 y se dio por probado, y, de la misma forma, cualquier subsidio por licencia médica sólo podía extenderse hasta esa fecha, no siendo viable ordenar que se haga un pago ulterior, sin perjuicio de la indemnización por un despido vulneratorio de Derechos Fundamentales que se ha decretado.

DÉCIMO NOVENO: *Sobre el resto de la prueba.* Que el resto de la prueba que no ha sido explícitamente mencionada en el análisis del fallo en nada altera lo antes concluido, siendo o evidencia que refuerza lo concluido o que no tiene la potencialidad de desvirtuarlo o está referida a cuestiones no controvertidas ni pertinentes.

VIGÉSIMO: *En cuanto a los reajustes e intereses.* Que la suma que ha sido condenada a pagar la demandada generarán los respectivos reajustes e intereses legales.



VIGÉSIMO PRIMERO: Acerca de las costas. Que, conforme lo dispone el art. 445 del Código laboral, no habiendo sido completamente vencida la denunciada, se le eximirá de las costas de la causa.

Y teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 5°, 420, 425 y ss., 456, 459. 485 y ss., y demás normas pertinentes del Código del trabajo; artículos 6, 7, 19 N°s 1 y 3 de la Carta Fundamental; artículos 3° y demás pertinentes de la Ley 18.575; artículos 3°, 16 y demás pertinentes de la Ley 19.880; artículos 30 y demás pertinentes de la Ley 18.695; y demás normas jurídicas aplicables, SE RESUELVE:

I. **Se acoge** la demanda por vulneración de Derechos Fundamentales con ocasión del despido deducida por **CLAUDIA ANDREA MENESES OLIVA** en contra de la **ILTRE. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA**, ambos ya individualizados, **declarando** que ésta vulneró el derecho a la salud y a la integridad síquica de la funcionaria con ocasión de su irregular remoción y **se le condena** al pago de una indemnización, conforme al art. 489 inc. 8° del Código laboral, por la suma de **\$36.314.280.- (treinta y seis millones trescientos catorce mil doscientos ochenta pesos)**.

II. Se rechaza en lo demás la demanda.

III. La suma que se ha determinado pagar generará los reajustes e intereses que dispone el art. 173 del Código laboral.



IV. No habiendo sido completamente vencida la denunciada, se le exime de las costas del juicio,

V. Una vez ejecutoriado este fallo, remítase copia a la Dirección del Trabajo, para su conocimiento y registro.

VI. Ejecutoriada que sea la presente resolución cúmplase lo resuelto dentro de 5° día, en caso contrario certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes a la unidad de cumplimiento ejecutivo del Tribunal.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

RUC 20-4-0303176-4

RIT T-457-2020

Dictó don **JUAN PABLO FLORES MENÉNDEZ**, Juez Destinado del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

En Antofagasta a, veintisiete de abril de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución precedente y se remitieron los correos electrónicos a las partes.



